

Santiago, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés.

**Vistos:**

En estos autos Rol N° C-1774-2021 del Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas, en procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios, por sentencia de siete de octubre de dos mil veintidós, se hizo lugar a la demanda deducida por el abogado señor Boris Paredes, en representación de los hermanos Leandro Mario, Fernando Alejandro y Patricio Marcelo todos de apellidos Lanfranco Leverton, por indemnización de perjuicios por daño moral, contra el Fisco de Chile, condenándolo a pagar a título de daño moral, la suma de cien millones de pesos (\$100.000.000).

Impugnada esa decisión, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, por sentencia de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, la confirmó con declaración que aumenta el monto a la suma de ciento veinte millones de pesos (\$120.000.000).

Contra esa sentencia el Consejo de Defensa del Estado por la parte demandada, dedujo recurso de casación en la forma, el que se ordenó traer en relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que la demandada esgrime como causal de casación la contemplada en el artículo 768 N° 5 con relación al artículo 170 N° 4 ambas disposiciones del Código de Procedimiento Civil

Refiere que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas no explicita cómo arribó a desestimar un análisis efectuado por el Departamento de Estudios del Consejo de Defensa del Estado, que hace referencia a los montos de condena que han determinado los tribunales del país en casos de tortura y detención ilegal sufridas durante el periodo del régimen militar en



Chile, analizando cuantitativamente los montos de condena por concepto de indemnización fijados por los tribunales tanto en primera como en segunda instancia, no indica en qué parámetros se basó, no analiza situaciones judiciales similares, no cita jurisprudencia de apoyo. No explica, del modo que lo exige la ley, el por qué está desestimando la alegación fiscal en atención a las circunstancias del caso.

Al resolver del modo indicado, además de omitir en la decisión los fundamentos o motivaciones que expliquen la razón que llevó a ello, el fallo recurrido altera y rompe todos los precedentes establecidos con anterioridad en materia de monto indemnizatorio del daño moral, padecido por familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, ocurridas entre el año 1973 y el año 1989, establecidos no sólo por la misma ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, sino también por la Excma. Corte Suprema al conocer respecto de fallos análogos al que por este acto se recurre.

Añade en su libelo que la sentencia en alzada no explica las razones que habrían justificado aumentar el monto del daño moral, ni cómo fueron valorados los medios de prueba aportados al proceso que permitan tener por acreditados tales hechos. Esto es especialmente relevante, pues no existiendo justificación alguna respecto a las consideraciones para tener por acreditadas dichas circunstancias fácticas, su corroboración se vuelve arbitraria y, en consecuencia, se vuelve también arbitrario el aumento decidido sobre el monto de cada indemnización.

De lo expuesto, concluye que inequívocamente los sentenciadores de alzada no consignaron elemento probatorio alguno o razonamientos de hecho o de derecho, no considerado en el fallo de primera instancia, que les hubiesen permitido válidamente considerar, explicar y justificar que el monto otorgado



por el fallo apelado no fuere conforme a la prudencia, sino del todo insuficiente, debiendo ser incrementado en un 20%, hasta completar los \$ 120.000.000.-, como monto para cada demandante.

Pide que se invalide la sentencia recurrida y acto seguido, sin nueva vista, pero separadamente, se dicte con arreglo a la ley la correspondiente sentencia de reemplazo mediante la cual, conforme la prueba rendida en segunda instancia por dicha parte, revoque la sentencia definitiva de primera instancia rebajando el monto indemnizatorio adecuándolo al baremo existente en causas de DDHH o, en subsidio la confirme, en cuanto fijó para los actores una indemnización de \$100.000.000.-

**Segundo:** Que, en relación a la causal de casación fundada en el artículo 768 N° 5 en relación al artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, de la lectura del recurso se advierte que lo que se les reprocha a los jueces del fondo es haber aumentado la indemnización por el daño moral padecido por los demandantes sin efectuar las debidas consideraciones de hecho y de derecho que sirvieron de apoyo a su decisión judicial

Con estos argumentos solicitó la invalidación de la sentencia, a fin de que en su reemplazo se resuelva acoger la demanda en todas sus partes, determinando el monto indemnizatorio que fijó el tribunal de primera instancia.

**Tercero:** Que en relación al vicio de casación formal denunciado, se hace necesario subrayar que el legislador se ha preocupado de establecer las formalidades a que deben sujetarse las sentencias definitivas de primera o única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales; las que, además de satisfacer los requisitos exigibles a toda resolución judicial, conforme a lo prescrito en los artículos 61 y 169 del Código de Procedimiento Civil, deben contener las enunciaciones



contempladas en el artículo 170 del mismo cuerpo normativo, entre las que figuran *–en lo que atañe al presente recurso–* en su numeral 4°, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia.

**Cuarto:** Que esta Corte, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 3.390 de 1918, en su artículo 5° transitorio, dictó con fecha 30 de septiembre de 1920, un Auto Acordado en que regula pormenorizada y minuciosamente los requisitos formales que, para las sentencias definitivas a que se ha hecho mención, dispone el precitado artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

Refiriéndose al enunciado exigido en el N° 4 de este precepto, el Auto Acordado establece que las sentencias de que se trata deben expresar las consideraciones de hecho que les sirven de fundamento, estableciendo con precisión aquéllos sobre que versa la cuestión que haya de fallarse, con distinción entre los que han sido aceptados o reconocidos por las partes y los que han sido objeto de discusión.

Agrega que si no hubiera discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, deben esas sentencias determinar los hechos que se encuentran justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirven para estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas legales. Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba rendida *–prosigue el Auto Acordado–* deben las sentencias contener los fundamentos que han de servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta anteriormente. Prescribe, enseguida, que una vez establecidos los hechos, se enunciarán las consideraciones de derecho aplicables al caso y,



luego, las leyes o, en su defecto, los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; agregando que, tanto respecto de las consideraciones de hecho como las de derecho, debe el tribunal observar, al consignarlos, el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones requiera.

**Quinto:** Que la importancia de cumplir con tal disposición ha sido acentuada por esta Corte Suprema por la claridad, congruencia, armonía y lógica en los razonamientos que deben observar los fallos. La exigencia de motivar o fundamentar las sentencias no sólo dice relación con un asunto exclusivamente procesal referido a la posibilidad de recurrir, sino que también se enmarca en la necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano de lo manifestado por el juez y hace posible, asimismo, el convencimiento de las partes en el pleito, evitando la impresión de arbitrariedad al tomar éstas conocimiento del porqué de una decisión judicial (SCS Rol N° 4835-2017 de 8 de enero de 2017).

**Sexto:** Que, en el mismo sentido y, complementando lo anterior, la fundamentación adecuada de las resoluciones judiciales es parte esencial de la garantía del debido proceso. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara en este punto: las garantías de debido proceso consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se extienden a todo tipo de procedimientos, inclusive civiles, en la medida que determinen o afecten los derechos de las personas (Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia. Párrafo 28; Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros v. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001, Párrafo 124; Corte



IDH. Caso del Tribunal Constitucional v. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Párrafo 70).

La no observancia de lo anterior, constituye una vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de otros tratados internacionales de derechos humanos que consagran y protegen el derecho al debido proceso, y que se encuentran incorporados en nuestro ordenamiento jurídico, por la disposición contenida en el artículo 5º, inciso segundo, de la Carta Fundamental de 1980.

**Séptimo:** Que útil resulta traer a colación lo expresado por los juristas nacionales don Mario Mosquera Ruiz y don Cristián Maturana Miquel, en su libro “Los Recursos Procesales”, quienes al analizar precisamente la causal del aludido arbitrio han dicho:

*“En el mismo sentido, se nos ha señalado que esta causal concurre cuando el vicio consiste en la falta de consideraciones mas no en la impropiedad de estas; la circunstancia que las consideraciones sean erradas o deficientes no se sanciona con la nulidad del fallo, puesto que ese vicio se constituye según la ley por la falta de consideraciones de hecho o de derecho, situación que se ha entendido se produce, asimismo, cuando entre sí son contradictorias o se destruyen unas a otras”* (MOSQUERA RUIZ, Mario y MATURANA MIQUEL, Cristián: Los Recursos Procesales. Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2010. P. 250).

**Octavo:** Que, el que la determinación del monto dinerario que permita en algún modo reparar, mitigar o ayudar a sobrellevar el dolor causado por el hecho ilícito asentado, deba necesariamente realizarse *prudencialmente*, ante la imposibilidad de fijar con alguna exactitud y certeza la suma que sirva a esos objetivos, no conlleva que esa evaluación sea arbitraria y antojadiza para el



órgano jurisdiccional, sino que ante la imposibilidad de concretarla sirviéndose de fórmulas, pautas o métodos uniformes y universales para todo tipo de situaciones, el tribunal debe analizar cada caso en base a sus especificidades y particularidades, sopesándolas con cautela y moderación, lo que por cierto le entrega mayor flexibilidad para dicha determinación, pero que no implica en modo alguno liberarlo del deber de expresar las razones que llevaron a arribar a esa conclusión.

**Noveno:** Que, al dictar la sentencia impugnada se confirmó la sentencia apelada con declaración que se aumenta el monto de la indemnización ordenada por daño moral a la suma de ciento veinte millones de pesos (\$ 120.000.000), por cada demandante razonando para ello en el considerando undécimo lo siguiente:

*“Que en cuanto al aumento de las indemnizaciones que se solicita, se tiene especialmente presente, que la situación de privación de libertad y tortura que sufrieron los demandantes significó un atentado a su integridad física y psicológica, que ha acarreado para ellos daños que no pueden ser revertidos.*

*Igualmente, la naturaleza de los sufrimientos, además de las torturas propiamente tales, fueron de distintas índoles, tales como limitación de su libertad ambulatoria, privación de libertad en condiciones extremas, como lo fue la permanencia en la Isla Dawson, condena a penas privativas de libertad de sumo extensas y la obligación de salir del país.*

*Al respecto no se puede dejar de tener presente, que ha sido esta familia especialmente golpeada, toda vez que queda acreditado, que tres de sus miembros fueron afectados por los actos dañosos de los agentes del Estado, ensañamiento que desbarata la posibilidad de sentirse amparados y*



*resguardados por el círculo que resulta ser el primer y principal soporte para el ser humano.”*

**Décimo:** Que de la lectura del recurso y la sentencia recurrida, no se evidencia la falta de fundamentación alegada, pues únicamente se plantea una discrepancia en torno a los fundamentos para aumentar la indemnización, discordándose solo de sus conclusiones, cuestión ajena a este recurso de naturaleza sustantiva, por lo que la causal no puede prosperar

**Undécimo:** Que como segundo capítulo de la misma causal, el Consejo de Defensa del Estado, reprocha que los sentenciadores no se hicieron cargo de un documento acompañado en segunda instancia, consistente en un estudio que se refiere a causas iniciadas durante los años 2018 y 2019, por indemnizaciones de perjuicios por daño moral derivado de actos constitutivos de tortura y detención ilegal sufridas durante el periodo del régimen militar en Chile, que han concluido por sentencia condenatoria, considerando lo que resolvieron tanto en el tribunal de primera instancia como por la Corte de Apelaciones respectiva.

Que al respecto se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 207 del Código de Procedimiento Civil que señala en su inciso primero *“en segunda instancia, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 310 y en los artículos 348 y 385, no se admitirá prueba alguna”*. De lo anterior se puede extraer como conclusión, que la prueba en segunda instancia es de carácter excepcional, por lo que debe ser expresamente incorporada como tal. Ahora bien, el escrito en que se acompaña el referido informe, nada dice en relación a que el documento fue acompañado como medio de prueba, corrobora lo anterior el hecho que se pidió simplemente tenerlo por acompañado, sin indicar su finalidad, por lo anterior el tribunal no estaba en obligación legal de





pronunciarse sobre el mismo, toda vez que no fue incorporado como un medio de prueba propiamente tal. De este modo, el tribunal no ha incurrido en la infracción denunciada, por lo que la causal no puede prosperar.

En las condiciones expresadas no puede catalogarse a la sentencia recurrida como carente de fundamentación, desde que en ésta se entregan los basamentos que conducen a la decisión alcanzada, por lo que sólo resta concluir que la impugnación formulada por la defensa dan cuenta de una mera discrepancia con las conclusiones a las que arriba el tribunal, por lo que las denuncias relativas a una presunta falencia en el razonamiento no será admitida, desestimándose el arbitrio en este punto.

Por estas consideraciones y lo previsto en los artículos 767 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en la forma, deducido por el Consejo de Defensa del Estado, en contra de la sentencia de **fecha 8 de febrero de 2023**, dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Rol 398-2022, la que en consecuencia no es nula.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Letelier.

Rol N° 26.442-2023

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., la Ministra Suplente Sra. Eliana Quezada M., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. No firma la Ministra Sra. Letelier y la Abogada Integrante Sra. Tavolari, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso y ausente, respectivamente.





En Santiago, a veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

